

APRENDER BAJO EL FUEGO: ATAQUES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA, 2020-2025

Kobo

Corporación Infancia y Desarrollo

Foto de portada: Autobús escolar incendiado en Chocó, Colombia.

Este informe fue redactado por Jerome Marston, Paula Alarcón Hoyos y Peyton Luiz. Niny Sánchez Rodríguez revisó el documento. Agradecemos a todos los docentes y profesionales de la educación que han dedicado su tiempo a compartir sus opiniones. Kobo diseñó el estudio y La Corporación Infancia y Desarrollo hizo la recolección de datos, bajo la estrecha supervisión del equipo de investigación de Kobo.

Este informe contó con el apoyo de la Fundación Education Above All (EAA).

Noviembre de 2025

Cita sugerida:
Jerome Marston, Paula Alarcón Hoyos y Peyton Luiz, «Learning under Fire: Attacks on Education in Colombia, 2020-2025» (Aprender bajo el fuego: ataques a la educación en Colombia, 2020-2025), Kobo, noviembre de 2025, https://www.kobo.ngo/attacksedcolreport20202025esp

Nota sobre la traducción: Este documento fue originalmente redactado en inglés. La presente versión en español es una traducción realizada con el fin de ampliar el acceso a la información. Pese al cuidado aplicado en el proceso de traducción, pueden existir variaciones en la redacción o matices que difieran ligeramente del texto original. En caso de duda o discrepancia, prevalece la versión en inglés.

© Kobo 2025

ÍNDICE

RESUMEN 3
- Antecedentes 3
- Principales hallazgos 3
- Recomendaciones 4

ANTECEDENTES 6
- Ataques contra la educación 6
- Conflicto armado 7
- Ataques a la educación en Colombia 8
- Prevención y respuesta en Colombia 8

METODOLOGÍA 10
- Diseño del estudio 10
- Características de la muestra 13
- Ética y seguridad 15
- Limitaciones 15

ATAQUES A LA EDUCACIÓN 17
- Ataques contra escuelas 18
- Uso militar de las escuelas 20
- Ataques a estudiantes y docents 21
- Reclutamiento de niños 22
- Violencia sexual 22

REPERCUSIONES DE LOS ATAQUES EN LA EDUCACIÓN 23
- Daños a la infraestructura escolar y cierres 23
- Interrupciones en la asistencia y dimisiones de docentes 24
- Repercusión en el bienestar psicológico 24
- Repercusión en la calidad de la educación y el aprendizaje 25
- Normalización del conflicto 25

PREVENCIÓN Y RESPUESTA 26
- Respuestas posteriores a los ataques para mantener la seguridad de las escuelas 26
- Denuncia de los ataques a la educación 28
- Percepciones de los maestros sobre la justicia 28
- Llamientos a la acción de los docentes 28

CONCLUSIÓN 31

NOTAS 32

RESUMEN

ANTECEDENTES

En Colombia, el conflicto armado no ha dejado de lado la educación. Los ataques a escuelas y docentes, el reclutamiento de niños en las rutas escolares y la ocupación de instalaciones educativas, entre otros ataques, tienen lugar en al menos un tercio de los departamentos del país.

Kobo llevó a cabo una encuesta a gran escala en Colombia para documentar los ataques contra la educación, junto con las estrategias para prevenirlos y responder a ellos. El estudio también se centró en las repercusiones de los ataques contra las escuelas, los estudiantes y el personal que trabaja en las escuelas, así como en la percepción de la justicia por parte de los educadores. Se encuestó a escuelas y docentes en municipios rurales afectados por el conflicto de los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

A pesar de su gravedad, los ataques contra la educación a menudo no se denuncian, y sus repercusiones, como las tasas de abandono escolar y los efectos psicológicos, no están bien documentadas. Los docentes también han hecho llamamientos claros a la acción para mitigar y responder a los ataques contra la educación, tal y como se evidencia en este reporte. Uno de los objetivos de este estudio es informar sobre las iniciativas de promoción, prevención y justicia.

PRINCIPALES HALLAZGOS

- Se documentaron más de 600 ataques contra la educación, ocurridos entre 2020 y la primera mitad de 2025, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Estos ataques causaron la muerte o lesiones a alrededor de 150 estudiantes y docentes, así como amenazas contra más de 140 personas.

- Los ataques más comunes incluyeron tiroteos cerca de las escuelas, explosivos colocados a lo largo de las rutas escolares, amenazas contra los docentes, reclutamiento de niños en su camino hacia o desde la escuela y el uso de las escuelas por parte de actores armados como espacios de reunión, bases o posiciones para la defensa.

- Las repercusiones de los ataques incluyeron el cierre de escuelas, el abandono escolar, la renuncia de docentes, problemas psicológicos entre los estudiantes y los educadores, y una disminución de la calidad de la educación.

- Los directores de las escuelas que participaron informaron sobre cierres por hasta 2,800 días debido a ataques contra la educación. En promedio, las escuelas permanecieron cerradas durante aproximadamente una semana luego de un ataque.

- Los ataques contra la educación afectaron de manera diferente a determinados grupos e instituciones, como las niñas, los niños y niñas con discapacidad y las escuelas a las que asisten estudiantes pertenecientes a grupos indígenas.

- Alrededor de dos tercios de las escuelas ocupadas por un actor armado fueron posteriormente atacadas por un grupo o fuerza rival, entre los casos documentados en este estudio.

- Al menos 40 escuelas atacadas se encontraban en las proximidades de comisarías de policía o bases militares, normalmente durante tiroteos entre grupos armados y fuerzas gubernamentales. Esto representa alrededor del 15 % de todos los ataques a escuelas documentados en este estudio.

- Los docentes y las comunidades desarrollaron y aplicaron estrategias para evitar la violencia y mantener la seguridad de los estudiantes, el personal y las escuelas. Para prevenir y responder a los ataques, los educadores establecieron sistemas de alerta temprana para reportar a las escuelas sobre actos de violencia, diálogos comunitarios para promover las escuelas como espacios pacíficos y

estrategias para denunciar la ocupación de escuelas por parte de actores armados, entre otras.

RECOMENDACIONES

El Gobierno colombiano ha dado pasos evidentes en la implementación de la Declaración sobre Escuelas Seguras y en la prevención y respuesta a los ataques contra la educación. No obstante, el Gobierno, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben seguir avanzando en la protección de las escuelas, los estudiantes y los educadores.

Recomendaciones clave de este estudio:

- Los Ministerios de Educación a nivel nacional y departamental deben dar prioridad a las escuelas primarias, las escuelas rurales y las escuelas a las que asisten estudiantes indígenas para su reparación y reapertura. Estas escuelas fueron, en general, las que permanecieron cerradas durante más tiempo después de los ataques.

- Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados no estatales deben tomar medidas para limitar los enfrentamientos armados cerca de las escuelas. Los tiroteos y enfrentamientos similares, fueron la forma más común de ataques contra escuelas documentados en este estudio.

- El Ministerio de Defensa y los organismos relacionados deben seguir aplicando la Declaración sobre Escuelas Seguras y sus *Directrices para proteger las escuelas y universidades del uso militar durante los conflictos armados.* Por su parte, los grupos armados no estatales deben respetar las *Directrices* y evitar el uso de las escuelas.

- El Ministerio de Defensa y los organismos pertinentes deben considerar la posibilidad de alejar las bases militares y las comisarías de policía de las escuelas, ya que su ubicación conjunta pone en peligro a los estudiantes y las instalaciones educativas cuando los grupos armados no estatales atacan a las fuerzas estacionadas. Cuando se le preguntó qué podría prevenir los ataques, un docente de Norte de Santander respondió: «*Ubicar a las fuerzas públicas en otro lugar, lejos de la escuela*».[i]

- El Gobierno, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben dar prioridad a la salud mental y el apoyo psicosocial de los estudiantes y los docentes, a la seguridad de las infraestructuras y las rutas escolares, a los sistemas de alerta temprana y a la formación y los protocolos de seguridad a la hora de desarrollar programas para escuelas más seguras. Estas fueron las medidas de prevención y respuesta que los docentes encuestados solicitaron con mayor frecuencia.

- El Gobierno, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben seguir desarrollando intervenciones específicas para mantener a las niñas y niños con discapacidad en la escuela después de un ataque a la educación, o reintegrarlos después de que hayan abandonado los estudios, entre otras cosas mediante un apoyo psicosocial continuo. Estos estudiantes eran más propensos a abandonar sus estudios que sus compañeros después de los ataques.

- El Gobierno, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben seguir desarrollando y aplicando herramientas flexibles de aprendizaje a distancia, teniendo en cuenta la falta de servicios de Internet y telefonía en algunas comunidades escolares rurales e indígenas, con el fin de garantizar la continuidad del aprendizaje tras un ataque contra la educación. Entre las escuelas de la muestra, una proporción significativa de directores informó que no se proporcionaba a los estudiantes guías de aprendizaje en casa u otro material tras un ataque, en particular en las escuelas de Chocó y Norte de Santander.

- El Gobierno debería reforzar y fortalecer la confianza establecida entre los docentes y los Ministerios de Educación y las Juntas de Acción Comunitaria a nivel departamental para aumentar la denuncia de los ataques contra la educación con fines de justicia. Mientras tanto, se debería fomentar la confianza en el ejército,

la policía y la fiscalía desde la base, ya que la confianza en estas instituciones para denunciar los ataques es baja entre los docentes encuestados en este estudio.

- El Gobierno, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben aprovechar los importantes avances logrados para seguir desarrollando mecanismos de seguimiento y denuncia de los ataques contra la educación.

- Las entidades gubernamentales a nivel nacional y departamental, los donantes y las organizaciones internacionales y de la sociedad civil deben garantizar que las opiniones de los docentes ocupen un lugar central en la planificación del sector educativo. Los docentes, que se enfrentan a diario a las repercusiones del conflicto, aportan ideas fundamentales para reforzar las iniciativas de mitigación de riesgos, preparación para emergencias y continuidad del aprendizaje, así como para desarrollar medidas destinadas a prevenir y responder a los ataques contra la educación.

ANTECEDENTES

La Coalición Global para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA) reportó más de 6000 ataques contra la educación en todo el mundo en 2022 y 2023. Estos ataques provocaron la muerte, lesiones, secuestros o detenciones de más de 10 000 estudiantes y educadores, y dañaron o destruyeron cientos de escuelas y universidades.[ii] Algunos de los países más afectados por los ataques contra la educación durante ese período fueron Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo y Myanmar.[iii]

Los ataques contra la educación son perpetrados por grupos armados no estatales, fuerzas armadas y otras entidades de seguridad del Estado.[iv] Algunos ejemplos son los bombardeos de escuelas, las amenazas contra los docentes y la ocupación de escuelas. En algunos contextos, las niñas o los docentes partes de minorías son objeto de ataques o se ven afectados de manera diferente por ellos. En otros casos, los estudiantes o las escuelas se ven atrapados en el fuego cruzado de los enfrentamientos armados. Más allá de los asesinatos y las lesiones, los ataques contra la educación a veces tienen repercusiones a más largo plazo, como trastornos psicológicos o el abandono escolar.

Se han aplicado importantes estrategias, políticas e intervenciones para prevenir y responder a los ataques contra la educación. Por ejemplo, en algunos contextos se han llevado a cabo negociaciones comunitarias con grupos armados o se han actualizado doctrinas y manuales militares; en otros lugares, se han construido centros de aprendizaje alternativos en estaciones de metro subterráneas para proteger a los estudiantes de los atentados con bombas.[v] Adicionalmente, el eje central de la protección de la educación en los conflictos armados es la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político intergubernamental que han firmado 121 gobiernos. La Declaración y sus *Directrices* proporcionan orientación práctica a los ejércitos (y a los grupos armados no estatales, en el caso de las *Directrices*) para evitar el uso de escuelas y universidades con fines militares y reducir el riesgo de ataques contra la infraestructura educativa.

A nivel internacional, se han juzgado pocos ataques contra la educación. Algunas razones encontradas para la falta de justicia por estos ataques son el resultado de que los tribunales nacionales e internacionales en ocasiones pasan por alto los delitos contra los niños o restan prioridad al derecho a la educación, según la GCPEA.[vi]

ATAQUES CONTRA LA EDUCACIÓN

Los ataques contra la educación son actos de violencia (o amenazas de violencia) contra escuelas y universidades, así como contra sus estudiantes y personal, perpetrados por fuerzas estatales o grupos armados no estatales, según la GCPEA.[vii] Por lo general, se producen en contextos de conflicto armado. Los ataques pueden llevarse a cabo por motivos políticos, militares, ideológicos o de otro tipo; en otros casos, los estudiantes, los educadores y las escuelas pueden verse atrapados en el fuego cruzado de los enfrentamientos armados.[viii] En algunos casos , los ataques causan muertes o lesiones, dañan las escuelas y crean miedo en las comunidades, lo que lleva a los cuidadores a mantener a sus hijos en casa.[ix]

Los ataques contra la educación pueden dividirse en varias categorías: ataques contra escuelas, uso militar de instalaciones educativas, ataques contra estudiantes y personal, reclutamiento de niños en las escuelas o en los trayectos escolares y violencia sexual en las instituciones educativas o en sus trayectos.[x] Los ataques contra la educación superior constituyen una categoría adicional, pero no se tratan en este informe.

ATAQUES A ESCUELAS

Los ataques a escuelas incluyen disparos con armas pequeñas, incendios provocados, tiroteos, vandalismo, explosivos y otros ataques a escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, perpetrados por fuerzas estatales o grupos armados no estatales.[xi] A nivel internacional, las escuelas son atacadas porque se las considera representantes del Estado, como medio para frenar

la educación de las niñas o para saquear recursos, entre otras causas. Las escuelas también se ven atrapadas en el fuego cruzado de los enfrentamientos entre actores armados.

USO MILITAR DE LAS ESCUELAS

El uso militar de las instalaciones educativas implica que un grupo armado no estatal o una fuerza gubernamental ocupe una escuela, estacione combatientes en las cercanías o utilice las instalaciones como posición defensiva, almacén de armas, campo de entrenamiento o para otros fines militares.[xii] A nivel internacional, se ha documentado que los actores armados utilizan las escuelas durante periodos que van desde menos de una hora hasta varios años.[xiii] El uso militar suele causar daños a las instalaciones y priva a los estudiantes del acceso a la educación o, cuando las instalaciones están parcialmente ocupadas, pone a los estudiantes y docentes en riesgo de sufrir violencia, incluido el reclutamiento de niños, y los expone a las armas. La ocupación también pone a las instalaciones educativas en riesgo de sufrir ataques de grupos o fuerzas rivales.[xiv] En comparación con otras estructuras, las escuelas y universidades suelen ser utilizadas por los actores armados porque están bien construidas o se encuentran en lugares estratégicos. En el caso de las fuerzas estatales, las escuelas también pueden ser seleccionadas porque las tropas consideran que los edificios públicos están a su disposición.[xv]

ATAQUES CONTRA ESTUDIANTES Y DOCENTES

Los ataques contra estudiantes y docentes incluyen secuestros, asesinatos o lesiones con armas pequeñas, represión de protestas, amenazas y otros actos de violencia perpetrados por fuerzas estatales o grupos armados no estatales. El fuego cruzado, los explosivos y otros actos de violencia indiscriminada a lo largo de las rutas escolares que recorren los estudiantes o docentes también se consideran ataques. A nivel internacional, los estudiantes son blanco de ataques por sus actividades políticas y, en algunos contextos, las estudiantes son atacadas por asistir a la escuela. Por su parte, los educadores son blanco de ataques en algunos lugares por su pertenencia a sindicatos de docentes, por ser representantes del Gobierno o por no ser originarios de la zona. En algunos ataques, los estudiantes y los docentes resultan heridos o muertos, lo que puede tener repercusiones en la comunidad en general, como que los cuidadores mantengan a sus hijos en casa o que los docentes supervivientes huyan de la zona.[xvi]

RECLUTAMIENTO DE NIÑOS

El reclutamiento de niños en la escuela, o de camino a ella o al volver de ella, consiste en el reclutamiento de menores de 18 años con cualquier fin por parte de fuerzas o grupos armados. Esto puede incluir el reclutamiento de niños como espías, para participar en combates, transportar equipo o cocinar, entre otros fines.[xvii]

VIOLENCIA SEXUAL

La violencia sexual en las instituciones educativas, o en el trayecto hacia ellas o desde ellas, implica que grupos armados o fuerzas estatales amenacen, acosen o abusen sexualmente de estudiantes o personal educativo.[xviii] A nivel internacional, fuerzas o grupos armados han perpetrado violaciones en escuelas, han obligado a estudiantes a desnudarse en el trayecto hacia la escuela y han cometido otros actos de violencia sexual en escuelas o en el trayecto hacia ellas.[xix]

CONFLICTO ARMADO

A pesar de los recientes acuerdos de cese al fuego y las negociaciones de paz, incluidos los acuerdos de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, Colombia sigue padeciendo un conflicto armado interno. Los disidentes de las FARC siguen activos, junto con otros grupos armados no estatales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN). También siguen operando grupos que sucedieron a los paramilitares tras la desmovilización, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).[xx] Los grupos armados se han fragmentado en los últimos años, lo que ha provocado un aumento de la violencia, ya que los grupos escindidos se enfrentan entre sí y con las fuerzas militares por el control del territorio.[xxi]

En particular, la violencia armada ha aumentado en algunas zonas rurales del país en los últimos años, afectando a más de ocho millones de civiles.[xxii] Alrededor de 388,000 personas fueron desplazadas

por la fuerza a causa del conflicto en 2024,[xxiii] y los grupos armados no estatales han impuesto confinamientos forzados a las comunidades, impidiendo a los civiles llevar una vida normal o abandonar la zona. Cientos de defensores de los derechos humanos y líderes sociales también han sido asesinados en actos de violencia rural, siendo las mujeres y los líderes de las comunidades afrocolombianas e indígenas los más afectados.[xxiv]

ATAQUES A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA

El conflicto armado en Colombia no ha perdonado a las escuelas. En la primera mitad de 2025, el Consejo Noruego para los Refugiados registró 52 ataques contra la educación en las zonas donde la organización mantiene presencia. El número de niños, docentes y personal afectados por estos ataques aumentó en comparación con el mismo periodo del año anterior.[xxv] Por su parte, la GCPEA identificó casi 200 ataques contra la educación en Colombia en 2022 y 2023.[xxvi] En los últimos años, se han producido ataques contra la educación en al menos un tercio de los departamentos del país, siendo Antioquia, Cauca, Chocó y Norte de Santander algunos de los más afectados.[xxvii]

Los ataques contra escuelas son la categoría de ataques más denunciada en Colombia, según la GCPEA. Estos ataques suelen consistir en artefactos explosivos improvisados colocados en la escuela o en sus alrededores, enfrentamientos armados cerca de las escuelas y amenazas.[xxviii] Por otra parte, el uso militar de las instalaciones educativas ha aumentado en Colombia en los últimos años. La mayoría de estos incidentes consistieron en el uso de escuelas como posiciones de combate o bases.[xxix]

En comparación con otros países, Colombia registra una alta proporción de ataques dirigidos contra docentes, quienes suelen sufrir amenazas o ataques por sus inclinaciones políticas o su afiliación sindical.[xxx]

En Colombia no se denuncian con frecuencia ataques selectivos contra estudiantes. Sin embargo, los estudiantes (y docentes) se ven atrapados en el fuego cruzado de los enfrentamientos armados y expuestos a explosivos cuando se desplazan hacia y desde la escuela, lo que también se considera un ataque a la educación.[xxxi]

También se han denunciado casos de reclutamiento de niños y violencia sexual relacionados con la escuela en el país.[xxxii]

Aunque muchos de los ataques contra la educación en los últimos años parecen haber sido perpetrados por grupos armados no estatales, también se ha informado que las fuerzas armadas colombianas han cometido ataques, incluido el uso militar de escuelas.[xxxiii]

Los ataques contra la educación no se denuncian en su totalidad debido al miedo a las represalias, la vergüenza y el limitado intercambio de datos desglosados, entre otras razones. En particular, se cree que el reclutamiento de niños y la violencia sexual relacionados con la escuela están infrarreportados, ya que los informes suelen omitir la ubicación de los incidentes, por lo que no se establece la conexión con las escuelas o las rutas escolares.[xxxiv] Debido a las limitaciones de datos y recursos, algunos temas clave siguen sin explorarse suficientemente en Colombia y en todo el mundo, como las repercusiones de los ataques contra la educación, los esfuerzos para prevenir y responder a los ataques y la percepción que tienen los docentes de la justicia en relación con los ataques.

PREVENCIÓN Y RESPUESTA EN COLOMBIA

El Gobierno colombiano firmó la Declaración sobre Escuelas Seguras en noviembre de 2022, comprometiéndose a salvaguardar la educación durante los conflictos.[xxxv] Poco después, el Gobierno elaboró el Plan de Acción Nacional sobre Escuelas Seguras para orientar la aplicación de la Declaración. En él, varios organismos gubernamentales, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, establecen medidas concretas que adoptarán para salvaguardar las escuelas y garantizar el derecho a la educación.[xxxvi]

En abril de 2025, el Gobierno Nacional firmó la Política Integral de Gestión de Riesgos Escolares y Educación en Situaciones de Emergencia. Esta Política incluye medidas específicas para

salvaguardar el derecho a la educación en contextos afectados por desastres naturales y conflictos, como planes institucionales de riesgo, preparación para emergencias y políticas de continuidad del aprendizaje.[xxxvii]

Además, desde 2010, según una orden del comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, se considera una violación que un comandante militar permita que sus tropas ocupen una escuela, debido al riesgo que esto supone para los niños.[xxxviii] La Defensoría del Pueblo también ha incluido los ataques a la educación en su sistema de alerta temprana,[xxxix] y se ha juzgado al menos un caso judicial relacionado con un ataque a la educación.[xl]

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales también han tomado medidas para salvaguardar la educación en Colombia, entre ellas la vigilancia y la denuncia de los ataques, la prestación de apoyo a los supervivientes y la garantía de la continuidad del aprendizaje.[xli] Algunas organizaciones internacionales también han colaborado directa o indirectamente con grupos armados no estatales para promover el respeto de las normas humanitarias y los derechos de los niños.[xlii]

Por último, las comunidades y los educadores han tomado medidas para prevenir y responder a los ataques contra escuelas, docentes y estudiantes. Entre otras, estas medidas incluyen el establecimiento de sistemas de alerta temprana, la mejora de la seguridad de las infraestructuras escolares y la denuncia de la ocupación de escuelas a las autoridades competentes, como se presenta en este informe.

METODOLOGÍA

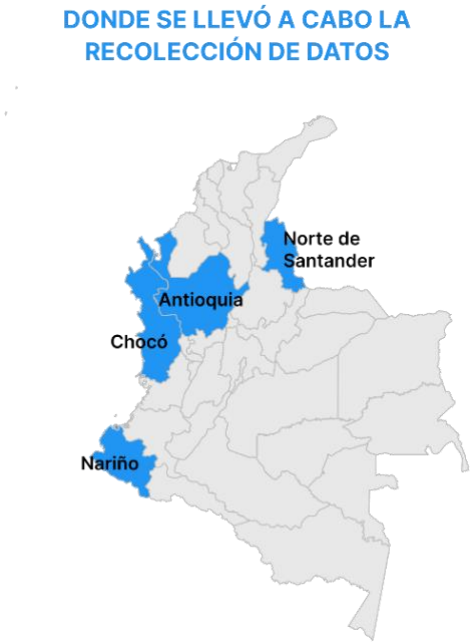
Este estudio se propuso documentar los ataques contra la educación y las medidas para prevenirlos y responder a ellos. También incluyó preguntas sobre los impactos de los ataques contra la educación y las percepciones de los docentes sobre la justicia. Para abordar estos temas, Kobo llevó a cabo dos encuestas presenciales semiestructuradas a mediados de 2025. Las encuestas, realizadas en español, se llevaron a cabo en Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander, departamentos seleccionados por haber sido altamente afectados por los ataques a la educación y por razones de accesibilidad (véase el mapa de Colombia más abajo). Las encuestas abarcaron 504 escuelas (con directivas o docentes a cargo de las escuelas como encuestados) y 300 educadores, lo que supone un total de 804 entrevistas.

DISEÑO DEL ESTUDIO

El estudio se centra en las escuelas y los docentes, en tanto los ataques contra las escuelas, el uso militar de las escuelas y los ataques contra los docentes son las categorías más frecuentes de ataques contra la educación en Colombia.[xliii]

Se elaboraron dos encuestas: una dirigida a las escuelas (con directivas o docentes a cargo de las escuelas como encuestados) y otra dirigida a docentes. Se realizaron encuestas distintas, ya que los ataques contra las escuelas (y su uso militar) tienen una dinámica única en comparación con los ataques contra docentes; del mismo modo, las medidas de prevención y respuesta y los impactos de la violencia son diferentes entre los distintos tipos de ataques.

Se utilizaron las definiciones de la GCPEA sobre los ataques contra la educación para diseñar y redactar la encuesta, realizar los análisis y redactar este informe.[xliv]



Mapa de Colombia.[xlv]

MUESTRA

Los ataques contra la educación son relativamente poco frecuentes (en comparación con otros acontecimientos que se podrían investigar) y no existe en Colombia un marco de muestreo de todas las escuelas (o docentes) que han sufrido un ataque.[xlvi] Por ello, el equipo de Kobo encuestó a escuelas y docentes de municipios seleccionados deliberadamente en los que los datos existentes sugerían que se habían producido o era probable que se hubieran producido ataques.

En primer lugar, se seleccionaron los cuatro departamentos para el estudio porque, según los datos de la GCPEA, se habían visto altamente afectados por los ataques a la educación y porque el socio local de Kobo, La CID, tenía acceso y experiencia trabajando en ellos. Dentro de estos departamentos, los datos de la GCPEA mostraban al menos un ataque contra la educación en 35 municipios (de un total de 260 en los cuatro departamentos), 31 de los cuales fueron seleccionados para el estudio (cuatro de ellos se consideraron inaccesibles).

Para aumentar el número de municipios de la muestra, se utilizaron datos del Clúster de Educación, sobre la violencia del conflicto que afecta directamente a los niños, considerando otros municipios en los que era probable que se hubieran producido ataques contra la educación (alcanzando un total de 55 municipios muestreados por departamento).[xlvii] Los municipios elegidos fueron en general mayoritariamente rurales y afectados por el conflicto.

Los dos tipos de encuesta se aplicaron en todos los municipios. Para la encuesta a las escuelas, el equipo de investigación seleccionó posteriormente de forma aleatoria las instituciones educativas; para la encuesta a los docentes, se aplicó un muestreo en bola de nieve.

En la *encuesta a las escuelas*, el equipo de investigación seleccionó aleatoriamente escuelas dentro de los municipios seleccionados de manera intencional (e incluyó en la lista cualquier escuela que se tuviese información acerca de haber sido atacada). Se utilizó un generador de números aleatorios para tomar muestras de una lista actualizada de todas las escuelas de los municipios pertinentes proporcionada por la *Secretaría de Educación* a nivel departamental.[xlviii] Se utilizó la selección aleatoria para garantizar que las escuelas pequeñas, muy rurales y otras que, de otro modo, podrían quedar excluidas, tuvieran las mismas posibilidades de ser incluidas en la muestra, teniendo en cuenta que los funcionarios no disponían de listas completas de las escuelas atacadas.[xlix]

Todos los niveles escolares recibieron el mismo trato en la muestra. En los casos en que los funcionarios de educación tenían conocimiento de un ataque o los encuestadores se enteraban de ataques mientras se encontraban en otras escuelas, la escuela atacada se añadía a la lista de escuelas que se iban a encuestar (y se eliminaba una escuela seleccionada al azar). Esto se hizo para aumentar la probabilidad de identificar e incluir en el estudio a las escuelas que habían sufrido un ataque.

Se encuestó a un total de 504 escuelas. Concretamente, los encuestadores hablaron con un director, administrador o coordinador de cada escuela sobre la institución seleccionada. Las entrevistas se realizaron generalmente en las escuelas, aunque un número limitado se llevó a cabo en un lugar neutral elegido por la persona participante, como oficinas administrativas o centros comunitarios.

En la *encuesta a docentes*, los encuestadores pidieron hablar con los educadores que habían sufrido la violencia del conflicto. Los encuestadores identificaron a los primeros participantes a través de los sindicatos, las Secretarías de Educación municipales y distritales y las redes de educadores, incluidas las escuelas en las que se realizó la primera encuesta (aunque *no* se entrevistó la misma persona para ambas encuestas). Dado que muchos educadores se conocen entre sí y forman parte de las mismas redes profesionales, el muestreo bola de nieve fue un medio eficaz para identificar a las personas participantes en contextos en los que otros métodos habrían sido menos prácticos. El estigma también pudo haber impedido que los docentes que sobrevivieron a un ataque participaran en el estudio, lo que en algunos casos se logró superar gracias a las referencias.

Se encuestó a un total de 300 educadores, además de los directores mencionados anteriormente. Entre los encuestados se encontraban docentes, personal escolar, coordinadores escolares y funcionarios locales de los Gobiernos, entre otros. Las entrevistas se realizaron en escuelas o en lugares neutrales elegidos por los educadores, como oficinas administrativas o sindicales, centros comunitarios o cafeterías.

INSTRUMENTOS DE LA ENCUESTA

El equipo de investigación diseñó y elaboró un cuestionario estandarizado y semiestructurado y un formulario de consentimiento en inglés y español, tras consultar con expertos y personal de ONG en Colombia. Las personas participantes del estudio fueron entrevistadas en español. Se realizó una prueba piloto para garantizar la claridad del cuestionario, y se hicieron los ajustes necesarios en el lenguaje antes de realizar las entrevistas oficiales.

El cuestionario para la *encuesta a las escuelas* incluía secciones sobre: datos demográficos de las personas participantes, información sobre la escuela y los datos demográficos de sus estudiantes y docentes, condiciones de seguridad de la escuela y sus alrededores, ataques a la educación que afectaran a la escuela (si los hubiera), repercusiones de estos ataques, confinamientos forzados, medidas de prevención y respuesta, y percepciones de la justicia.

Por su parte, el cuestionario para la *encuesta a los docentes* incluía secciones sobre: datos demográficos de las personas participantes, condiciones en el trabajo y durante los desplazamientos a las escuelas, ataques a docentes (si los hubiera), repercusiones de estos ataques, bienestar psicológico, confinamientos forzados, medidas de prevención y respuesta, y percepciones de la justicia. Si la escuela (o docente) no había sufrido ningún ataque, se hacían una serie de preguntas separadas sobre la inseguridad y la violencia generalizada en la zona. Este diseño permitía a los encuestadores seguir recogiendo datos relevantes en los casos en que la escuela (o el docente) no hubiese sufrido un ataque directo. No se incluyeron en los cuestionarios preguntas sobre ataques a universidades o académicos, ya que esos ataques no eran el objeto del estudio.

El estudio abarcó los ataques contra la educación entre 2020 y la primera mitad de 2025. En Colombia, las clases comienzan a principios de cada año calendario, por lo que enero de 2020 fue un punto de partida útil, sobre todo teniendo en cuenta que la pandemia de COVID-19 afectó a las escuelas poco después.

Los instrumentos se codificaron e instalaron en teléfonos que funcionaban con KoboToolbox, una plataforma de recolección de datos digitales gratuita y de código abierto. La herramienta permite controlar la calidad de los formularios completados y evita errores comunes de los usuarios, como preguntas omitidas. Se recogieron grabaciones de voz en respuesta a varias preguntas abiertas, cuando las personas participantes dieron su consentimiento. Concretamente, los encuestadores utilizaron la aplicación KoboCollect.

RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

La recolección de datos fue realizada por encuestadores y supervisores de campo capacitados durante nueve semanas, desde abril hasta junio de 2025. El equipo de investigación llevó a cabo una capacitación de una semana en Bogotá para los encuestadores, que incluyó los cuestionarios, buenas prácticas para la recolección de encuestas, ética y seguridad, y definiciones conceptuales sobre ataques a la educación. Seguido de la capacitación, los encuestadores regresaron a sus respectivos departamentos para comenzar la recolección de datos.

Para acceder a las zonas afectadas por el conflicto y llegar a las escuelas y los educadores afectados, el equipo de investigación contrató a encuestadores de los departamentos seleccionados que tenían experiencia en el levantamiento de datos o en programas sociales en los municipios pertinentes. El equipo también colaboró estrechamente con los Gobiernos locales y los líderes comunitarios.

Los datos se transmitían diariamente desde el terreno a un servidor seguro tan pronto como se disponía de conexión a Internet. Tras la fase de recolección, los datos se exportaban desde KoboToolbox a un programa estadístico para su análisis. No se aplicaron ponderaciones a los datos

para el análisis, ya que el objetivo era principalmente descriptivo.

Tras la recolección de datos, se aplicaron estadísticas descriptivas básicas utilizando un programa estadístico, mientras que los datos cualitativos se analizaron temáticamente de forma manual para detectar patrones. Con la excepción de la elaboración del número total de ataques a la educación que se recogen en el estudio, los datos de las dos encuestas se analizaron por separado.

La mayoría de los resultados que se comparten en este informe proceden de la encuesta a las escuelas; cuando los resultados proceden de la encuesta a los docentes, se indica en el texto. El equipo de investigación analizó los datos por cada departamento, pero encontró pocas diferencias significativas (con la excepción del apoyo al aprendizaje en casa después de los ataques, que se analiza más adelante). La presentación de los resultados de forma agregada también contribuyó a preservar el anonimato de las personas que participaron en el estudio.

Este estudio identificó los efectos de los ataques en la educación a partir de datos informados por directivas de las escuelas y otros educadores (en lugar de datos administrativos, por ejemplo). Del mismo modo, los pocos detalles sobre los objetivos y las intenciones de los actores armados que se recogen en este estudio proceden de la perspectiva de los educadores, y no de los propios actores armados.

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

ESCUELAS

La muestra incluyó 504 escuelas (véase la tabla con el desglose por departamentos). Las personas reportaron que en 352 (67 %) de las escuelas de la muestra informaron de uno o más ataques contra la escuela o sus estudiantes y personal. Este porcentaje es elevado precisamente porque se seleccionaron municipios en los que se sabía que se habían producido ataques o actos de violencia similares.

La mayoría de las escuelas encuestadas (56 %) eran escuelas preescolares y de primaria básica, seguidas de escuelas de primaria y secundaria (37 %) y escuelas secundarias (7 %). Las escuelas de la muestra tenían un total de 63,557 estudiantes matriculados (55 % mujeres) y empleaban a un total de 4,618 educadores. El 17 % de las escuelas tenía matriculados principalmente o en su totalidad estudiantes identificados como afrocolombianos y el 17 % tenía matriculados principalmente o en su totalidad estudiantes identificados como indígenas. Alrededor del 1 % de los estudiantes de estas escuelas tenía alguna condición de discapacidad física.

Todas las escuelas estaban situadas en municipios mayoritariamente rurales. Dentro de esos municipios, las escuelas se distribuían de manera relativamente uniforme entre el centro del casco urbano(37 %), las afueras (27 %) y una ubicación a más de un kilómetro del casco urbano (36 %).

DOCENTES

La muestra incluyó a 300 educadores para la encuesta a docentes (véase la tabla con el desglose por departamentos). Alrededor del 30 % de los educadores de la muestra informaron haber sufrido un ataque. Los docentes fueron seleccionados en municipios con altos índices de violencia y a través de redes de educadores que habían debatido sobre la violencia, lo que explica el alto porcentaje de personas víctimas de un ataque.

La mayoría de lolas personas que participaron eran docentes (82 %). Otras funciones incluían coordinador escolar, director, personal escolar, funcionario del ministerio y otros profesionales de la educación. Alrededor del 1 % de los encuestados eran jubilados. El 60 % de los encuestados eran mujeres, mientras que el 17 % se identificaban como afrocolombianos y el 20 % como indígenas. Menos del 2 % de los encuestados se identificaban como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o queer (LGBTQ+).

Los encuestados llevaban una media de diez años en su escuela o ministerio actual. Los educadores tenían una media de 16 años de experiencia total en el campo.

Entre los encuestados que eran maestros de escuela, el 47 % enseñaba en una escuela preescolar o primaria, el 42 % enseñaba en una escuela de varios niveles y el 10 % enseñaba en una escuela secundaria.

Departamento	Total Escuelas muestreadas
Antioquia	151
Norte de Santander	150
Nariño	104
Chocó	99

Departamento	Docentes incluidos en la muestra
Antioquia	84
Norte de Santander	84
Nariño	75
Chocó	57

ÉTICA Y SEGURIDAD

Antes de recopilar los datos, Kobo presentó el estudio a un comité de ética independiente con sede en Estados Unidos, que evaluó el diseño de la investigación, los procedimientos de muestreo y selección, y los cuestionarios.[I] Organizaciones locales e internacionales dedicadas a la educación en situaciones de emergencia y a la protección también revisaron el estudio desde un punto de vista ético y proporcionaron comentarios, que el equipo de investigación incorporó.

Las personas participantes dieron su consentimiento informado antes de comenzar las entrevistas. También previo al consentimiento, los encuestadores discutieron los riesgos, dejaron claro que la participación era opcional, compartieron los temas de la encuesta e informaron a los posibles encuestados que sus respuestas anónimas se utilizarían para elaborar un informe y en iniciativas de incidencia. No se ofreció ningún pago ni otras ventajas por participar en la encuesta. Solo se incluyeron en el estudio personas mayores de 18 años.

Los encuestadores realizaron las entrevistas en dispositivos digitales utilizando KoboCollect, una aplicación móvil de recolección de datos con cifrado, para proteger los datos confidenciales. Los datos se almacenaron en un servidor seguro en la nube.

Se tomaron varias medidas para garantizar la seguridad de los encuestados, así como para evitar la revictimización (en el caso de que los encuestados fueran sobrevivientes de ataques a la educación u otros tipos de violencia). Por motivos de seguridad, los encuestados seleccionaron el lugar de la entrevista, los encuestadores recibieron formación sobre confidencialidad y se hizo hincapié en el carácter opcional de la encuesta desde el primer contacto. Para evitar la revictimización, los encuestadores prestaron atención a los signos de estrés, fatiga y trauma. Cuando era necesario, respondían ralentizando el ritmo, ajustando la ubicación y tomando otras medidas para promover la comodidad de los encuestados. También ofrecían descansos o la posibilidad de finalizar la encuesta, y ponían a las personas participantes en contacto con apoyo psicosocial según fuera necesario.

LIMITACIONES

El diseño de la investigación equilibró el rigor metodológico con las preocupaciones de seguridad y los retos que plantea la recolección de datos sobre acontecimientos violentos. Este estudio tiene varias limitaciones, como ocurre con todas las investigaciones de este tipo. El equipo de investigación tuvo en cuenta estas limitaciones, mitigándolas en la medida de lo posible y comunicando los resultados con matices.

Los resultados de la encuesta realizada en las escuelas no pueden generalizarse a todo el departamento o condado, ya que los municipios fueron seleccionados de forma intencionada. No obstante, se utilizó este diseño porque la prioridad era documentar los ataques y las medidas de prevención y respuesta, más que obtener un porcentaje del total de escuelas afectadas u otros resultados representativos. Del mismo modo, la muestra de educadores para la encuesta dirigida a docentes tiene varios sesgos inherentes, al tratarse de una muestra no probabilística. El muestreo en bola de nieve se basa en redes, por lo que las muestras generadas suelen compartir características y pueden no ser representativas de la población en general. Sin embargo, para mitigar esta limitación, los encuestadores se basaron en numerosos contactos para obtener referencias en docenas de municipios, como se refleja en las diversas características demográficas de las personas participantes. Dado que uno de los objetivos del proyecto era conocer las experiencias de los docentes en materia de inseguridad y ataques a la educación, se consideró que este era un enfoque adecuado.

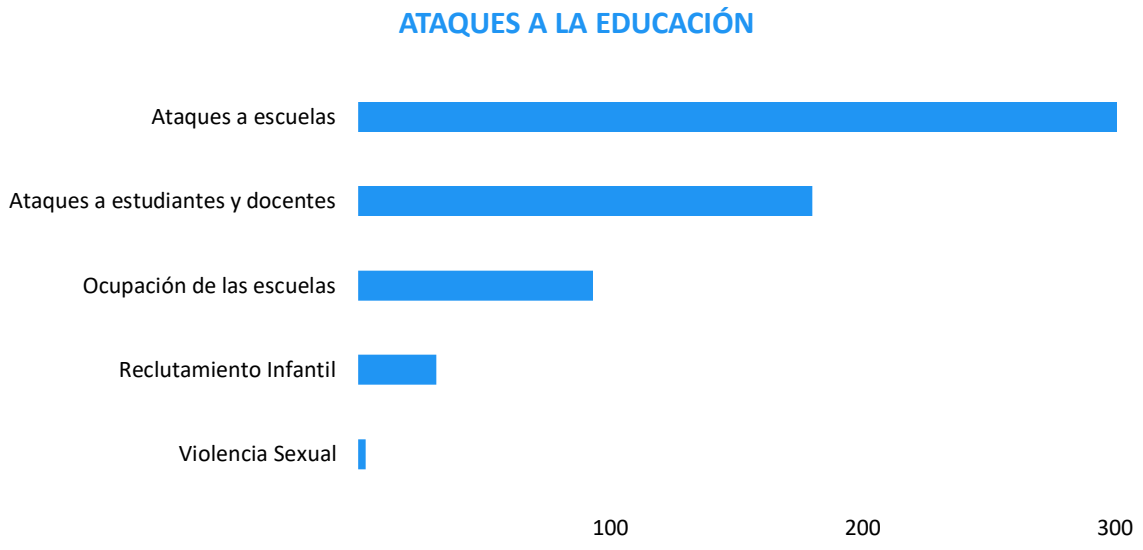
Preguntar a las personas participantes sobre acontecimientos ocurridos hace varios años puede haber introducido un sesgo de recuerdo; sin embargo, se seleccionó un amplio período de tiempo para aumentar la probabilidad de identificar incidentes. En los casos en que las escuelas o los docentes sufrieron más de un ataque (lo cual era relativamente común), se les pidió que comentaran el más reciente, lo que limitó el sesgo.

El equipo de la encuesta se enfrentó a varios retos operativos y de seguridad, entre ellos municipios afectados por enfrentamientos armados y confinamientos forzados, lo que requirió adaptaciones e es. Cuando no fue posible el acceso físico, se realizaron entrevistas telefónicas en algunos casos (el 6 % de las encuestas a escuelas y el 7 % de las encuestas a docentes). También se entrevistó a un número limitado de participantes en una ciudad o pueblo neutral fuera de su municipio si lo consideraban más seguro. Además, cuando la violencia aumentó en un número limitado de municipios (según el seguimiento continuo de la seguridad), se ordenó a los encuestadores que se trasladaran a un municipio más seguro seleccionado de la lista establecida. Los encuestadores realizaron las encuestas en el nuevo municipio hasta que el municipio original se estabilizó o fue sustituido de forma permanente (utilizando un banco de municipios alternativos preseleccionados). Los encuestadores también trabajaron en equipos de dos personas en ocasiones por su seguridad, lo que ralentizó el proyecto. A pesar de los ligeros sesgos potenciales, el equipo de investigación consideró que estas adaptaciones eran necesarias para la seguridad de las personas participantes y de los encuestadores.

ATAQUES A LA EDUCACIÓN

En este estudio se documentaron más de 600 ataques a la educación, ocurridos entre 2020 y la primera mitad de 2025, en los departamentos de Antioquia, Chocó, Nariño y Norte de Santander. Estos ataques causaron la muerte o lesiones a unos 150 estudiantes y docentes, así como amenazas contra más de 140 personas. Estos ataques afectaron a más de 47,000 estudiantes (55 % mujeres) y 3024 educadores (59 % mujeres), entre los que se encontraban estudiantes afrocolombianos (35 %) e indígenas (23 %), así como estudiantes con discapacidad (algo menos del 1 %).

Los ataques contra escuelas fueron la categoría más frecuente, seguidos de los ataques contra estudiantes y docentes y la ocupación de edificios escolares (véase el gráfico siguiente). Más concretamente, los ataques incluyeron tiroteos cerca de escuelas, colocación de explosivos en las rutas escolares, amenazas contra docentes, uso de escuelas por parte de actores armados como lugares de reunión, bases o posiciones defensivas, y reclutamiento de niños en su camino hacia o desde la escuela.



ATAQUES CONTRA ESCUELAS

Se documentaron más de 300 incidentes de ataques a escuelas en los cuatro departamentos estudiados, ocurridos entre 2020 y la primera mitad de 2025. Al menos 10 docentes murieron en estos ataques (ocho de ellos hombres) y tres docentes resultaron heridos (todos hombres). También resultaron heridos tres estudiantes (dos de ellos hombres).
La mayoría de los ataques contra escuelas fueron tiroteos en las inmediaciones de las mismas, seguidos de artefactos explosivos colocados en ellas o cerca de ellas, amenazas contra escuelas, saqueos o vandalismo, extorsión y otras formas de ataque (véase el gráfico siguiente). Lo más habitual es que estos ataques se produjeran en escuelas situadas en ciudades, más que en las afueras o más lejos de ellas, incluso teniendo en cuenta la muestra. Por otra parte, todos los niveles escolares, desde preescolar hasta secundaria, se vieron afectados sin un patrón discernible.

Por ejemplo, una directora de escuela de Nariño contó: «*Un día estábamos empezando la clase a las 7:30 de la mañana cuando oímos disparos cerca del centro educativo. Confirmamos que estaban a unos 500 metros por encima de la escuela. Ellos [un grupo armado] estaban en conflicto con el ejército... Los niños estaban muy asustados, incluso lloraban. Los encerré en el aula; ni siquiera querían ir al baño».* También contó que la oficina del Defensor del Pueblo llamó después para comprobar y hacer un seguimiento de la escuela, los estudiantes y el personal.[li]
En caso de amenazas, la escuela solía recibir un panfleto o el director un mensaje de Whatsapp amenazando a la institución (y a sus docentes) para que abrieran solo en determinados horarios, por su supuesto apoyo a ciertos grupos armados o por haber rechazado una demanda de un grupo armado.

En muchos casos, los directores compartieron que pensaban que la causa del ataque era la competencia entre actores armados por el control territorial, o que la violencia estaba dirigida a un grupo armado cercano o a una comisaría de policía. Menos del 5 % de los encuestados consideraba que el ataque estaba dirigido directamente a la escuela. Un director de escuela en Chocó dijo: «*No tiene nada que ver con la institución educativa, el ataque estaba dirigido al otro grupo armado que se encontraba cerca de la escuela».*[lii] Probablemente este sea el caso de los tiroteos y algunos incidentes con explosivos cerca de las escuelas; sin embargo, en el caso de las amenazas, la extorsión y el vandalismo, la escuela era casi con toda seguridad el objetivo.[liii]

ATAQUES A ESCUELAS SITUADAS CERCA DE COMISARIAS DE POLICÍA O BASES MILITARES

Alrededor del 15 % de todos los ataques a escuelas documentados en este estudio se produjeron en escuelas situadas a menos de un kilómetro de una comisaría de policía o una base militar. Esto supuso un total de 40 escuelas atacadas, algunas de ellas en múltiples ocasiones. Estos ataques consistieron con mayor frecuencia en tiroteos y, en menor medida, en explosivos colocados cerca de la escuela.

En un ejemplo, un docente de una escuela situada cerca de una comisaría de policía en Norte de Santander contó: «*Estábamos celebrando un desfile por el aniversario de la institución. El [grupo armado] llevó a cabo un ataque contra la policía y nos vimos envueltos en el fuego cruzado. Las balas impactaron en las ventanas y la fachada de la institución. El ataque duró aproximadamente 30 minutos*». Ningún estudiante ni educador resultó herido.[liv]

En otro caso, un director de escuela de Norte de Santander contó que se colocaron explosivos a 50 metros de su escuela combinada de primaria y secundaria. Creía que el objetivo eran las fuerzas armadas cercanas.[lv]


ATAQUES A ESCUELAS
Tiroteo cerca de la escuela
Explosivos en o cerca de la escuela
Amenaza
Saqueo o vandalismo
Extorsión
Ataques aéreos y drones
Fuego
Otro
100
200

USO MILITAR DE LAS ESCUELAS

Se documentaron 93 incidentes de uso militar de escuelas en los cuatro departamentos estudiados.[lvi] Estos incidentes se registraron en 86 escuelas, varias de las cuales fueron utilizadas más de una vez entre 2020 y la primera mitad de 2025. Se informó que los principales responsables eran grupos armados no estatales, aunque muchos de los encuestados se negaron a proporcionar detalles sobre los autores.

Los actores armados utilizaban las escuelas principalmente como lugar de reunión, base, posición defensiva y de punto de tiro, o para aprovechar las instalaciones y servicios de la escuela (por ejemplo, internet, cocina). Varios directores también mencionaron que la escuela se encontraba en una ruta por la que transitaban a menudo los actores armados, por lo que a veces descansaban en la escuela o en sus alrededores, aunque no entraran en el recinto.

Por ejemplo, un docente de Chocó comentó: *«Estaba en la escuela enseñando a los niños cuando apareció un grupo armado. Llegaron y se apoderaron de la escuela... Estaban fuertemente armados y me preguntaron si podía organizar que la escuela se utilizara para una reunión con la comunidad e e por la tarde. Como no se puede decir que no a estas personas, les dije que sí... Tan pronto como terminaron su reunión, abandonaron la escuela y la comunidad».*[lvii]

Las ocupaciones de escuelas duraron alrededor de 65 días consecutivos en promedio, entre los casos aquí reportados. Como era de esperar, la duración del uso militar tendió a variar según el propósito de la ocupación. Algunos casos de uso militar duraron solo una o dos horas; estos fueron típicamente reuniones o casos de actores armados que utilizaron Internet o la cocina mientras pasaban por la zona. Por otro lado, las escuelas utilizadas como base, campamento o posición defensiva o de tiro fueron generalmente ocupadas por períodos más largos. Los directores de las escuelas informaron que los actores armados solían iniciar la ocupación por la mañana o al mediodía, mientras los estudiantes estaban en la escuela.

En algunos casos, la escuela permanecía abierta mientras un actor armado acampaba cerca o utilizaba la escuela para reuniones o sus servicios (durante el día o la noche). Los docentes impartían clases a los estudiantes en cualquier espacio que quedara libre en las pequeñas escuelas rurales, o reanudaban las clases después de que la escuela hubiera sido utilizada la noche anterior. En otros casos, la escuela se cerraba por completo, generalmente mientras el actor armado la utilizaba como base o posición defensiva y ocupaba todas las aulas.

El uso militar era tan común en las escuelas de la ciudad o en las afueras como en las escuelas situadas a uno o más kilómetros de la ciudad. Este hallazgo puede resultar un poco contradictorio, ya que cabría esperar que la ocupación de las escuelas por parte de grupos armados no estatales se produjera en las zonas más rurales, donde es más probable que el Estado esté ausente. Sin embargo, al menos en esta muestra de escuelas, el uso militar también se produjo en ciudades (en municipios rurales), donde se podría suponer que las fuerzas estatales tienen una mayor presencia.[lviii] En relación con esto, el uso militar durante períodos más largos parecía más común en las zonas rurales, mientras que en las ciudades el uso militar era más comúnmente para reuniones o paradas rápidas.

ATAQUES A ESCUELAS MIENTRAS ESTABAN OCUPADAS

Alrededor de dos tercios de las escuelas ocupadas por una fuerza o grupo armado fueron posteriormente atacadas por un rival. Concretamente, 66 escuelas fueron atacadas mientras se utilizaban con fines militares, entre los casos documentados en este estudio.

En un caso, un grupo armado no estatal ocupó una escuela primaria situada a las afueras de una ciudad del departamento de Nariño durante la mitad del año 2024. El grupo armado utilizó la escuela como base, lo que provocó su cierre y el traslado de los estudiantes. «*Una mañana, a las 2 de la madrugada, otro grupo les tendió una emboscada, atacando tanto por encima como por debajo de la escuela. Lo que siguió fue un largo enfrentamiento con el nuevo grupo, que logró expulsar al antiguo... y finalmente estableció el control sobre la zona*», contó la directora de la escuela.[lix] La ocupación y el posterior tiroteo dañaron el material didáctico, los juguetes, la cocina y el baño, los depósitos de agua, las ventanas y las puertas.

En otro caso, un docente de Norte de Santander explicó: «*Bueno, todo empezó cuando el Ejército llegó a la institución y colocó un puesto de guardia en la escuela. Así que creímos que esa era la razón por la que los insurgentes o el grupo armado tomaron represalias, no contra la escuela, sino contra el personal militar que estaba presente en la institución. Y por eso hubo tiroteos y enfrentamientos armados, especialmente por la noche, contra las fuerzas públicas, que afectaron a las instalaciones de la escuela y también a las casas de los alrededores... La casa de los profesores que está cerca de la institución se vio afectada por los tiroteos y los enfrentamientos armados, también fue alcanzada por balas que aún permanecen en las paredes de la casa y también, bueno, de la escuela*».[lx]

ATAQUES A ESTUDIANTES Y DOCENTES

Se identificaron al menos 180 ataques contra estudiantes y docentes en los cuatro departamentos estudiados. Estos ataques fueron principalmente contra docentes, aunque se registraron algunos ataques contra estudiantes (principalmente amenazas). Además, se documentaron alrededor de 50 casos de explosivos en las rutas escolares, que afectaron tanto a estudiantes como a docentes. Estos ataques se produjeron entre 2020 y la primera mitad de 2025.

Se colocaron explosivos en las rutas escolares de los cuatro departamentos. Las minas antipersonales y otros explosivos afectaron a los estudiantes, sus familias y los docentes, que se desplazan a pie, en bicicleta, en barco y en autobús para ir a la escuela. Un docentes de una escuela preescolar y primaria de Chocó contó: «*Colocaron explosivos en la ruta que recorremos [para ir a la escuela] con los niños. Una vez, colocaron una bandera y un niño la tocó, y las esquirlas volaron por todas partes. Nos dio un susto terrible; tuvimos que llevarlo corriendo al hospital*».[lxi]

En otro ejemplo, un maestro de Norte de Santander dijo: «*Bueno, como esta vía es la principal, los grupos armados dejan explosivos para impedir el paso de las fuerzas militares o la policía. Los dejan a los lados de la carretera o también en carros o motocicletas... poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por allí, incluidos los estudiantes y los padres de la institución. Lo mismo ocurre con los maestros*».[lxii]

En el caso de los ataques a educadores, cuatro docentes fueron asesinados (tres hombres y uno desconocido), cuatro docentes resultaron heridos (tres de ellos hombres) y más de 140 docentes fueron amenazados (ligeramente más hombres). Aparte de los explosivos, las formas más frecuentes de violencia fueron los tiroteos a lo largo de las rutas escolares y las amenazas y extorsiones en la escuela, a lo largo de las rutas escolares y en los hogares de los docentes. Las amenazas solían consistir en llamadas telefónicas, mensajes de Whatsapp y folletos dirigidos al docente en cuestión. En el caso de la violencia o las amenazas selectivas, los encuestados afirmaron que los

ataques se dirigían a docentes indígenas, líderes del sindicato de maestros y personas que los autores consideraban informantes (de grupos armados rivales).

En un ejemplo, una directora de escuela en Nariño dijo: *«Después de asumir este cargo, recibí amenazas en dos ocasiones en las que me exigían que se realizaran cambios administrativos y amenazaban a mis hijos, a mi marido…»*. La maestra contó que denunció el ataque ante la *Fiscalía* y el Ministerio de Educación del departamento, y que la situación mejoró después de que se hiciera una declaración pública.[lxiii]

En un ejemplo de extorsión por teléfono, una maestra de Chocó dijo: *«Recibí una amenaza mientras estaba en el aula… diciéndome que les depositara dos o tres millones de pesos. Entonces, cuando les dije: "No, no tengo dinero y tengo que ir a [lugar] a buscarlo", me respondieron: "Ah, bueno, maestra, si no nos consigue el dinero, acatará las consecuencias". Colgué, después de mucho tiempo… me enviaron algunos mensajes diciéndome que ya sabían dónde vivían mis hijos, que tenían localizada a mi familia»*.[lxiv] Los docentes fueron objeto de extorsión porque se conoce que reciben un salario regular.

RECLUTAMIENTO DE NIÑOS

Se documentaron más de 30 casos de reclutamiento de niños relacionados con la escuela, que afectaron al menos a 100 estudiantes. Entre los casos aquí denunciados, alrededor del 80 % de los estudiantes eran hombres, mientras que el 20 % eran indígenas y el 10 % afrocolombianos.[lxv] En muchos casos se trataba del reclutamiento de un solo estudiante, pero en algunos casos el mismo actor armado reclutó a tres o hasta una docena de estudiantes al mismo tiempo.

Los directores de las escuelas de los cuatro departamentos estudiados informaron que el reclutamiento se había producido entre 2020 y la primera mitad de 2025, y que tanto niños como niñas se habían visto afectados en los cuatro departamentos. Aunque los directores no conocían el motivo del reclutamiento (o se negaron a revelarlo) en más de la mitad de los casos, cuando se disponía de información, los motivos incluían la lucha, el espionaje, las tareas domésticas, el transporte de armas u otro material, y la violencia sexual.

En un caso de reclutamiento en una ruta escolar en Antioquia, una directora dijo: *«Los estudiantes caminaban un largo trecho [hasta la escuela] y se encontraban con miembros de un grupo armado, que actuaban como si fueran buenas personas, y caminaban con ellos. Luego, reclutaban a los estudiantes que parecían más fuertes»*.[lxvi]

En otro ejemplo, en una comunidad indígena de Chocó, un maestro informó que miembros de un grupo armado reclutaron lentamente a niños cerca de la escuela. Dijo: *«Llegaron, les dieron cinco mil pesos para convencer a los niños, por eso siete de ellos se unieron a sus filas debido al dinero que están repartiendo. Cuando llegaron, se quedaron una semana regalando dulces y juguetes para convencerlos. Algunos son sus espías, que les informan si un líder o un maestro habla mal del grupo»*.[lxvii]

En otros casos, los miembros de grupos armados atacaban a niñas de unos 15 años cuando iban al colegio. Los miembros de los grupos armados usaban su posición para presionar a las niñas para que fueran sus «novias», un método que se usaba para reclutar a estudiantes femeninas con el tiempo.

El reclutamiento a lo largo de las rutas escolares en un punto cercano a la escuela fue el lugar más comúnmente señalado. Sin embargo, los directores de las escuelas también informaron que se reclutaba a niñas a lo largo de las rutas escolares más cercanas a sus hogares y a través de las redes sociales. El reclutamiento en la escuela durante las clases no se documentó en el estudio.

VIOLENCIA SEXUAL

En este estudio se identificaron tres incidentes de violencia sexual, ocurridos entre 2020 y la primera mitad de 2025. En uno de ellos, una docente que se dirigía a la escuela en Norte de Santander fue acosada sexualmente por un actor armado, que se exhibió ante ella. La docente informó que después sufrió ansiedad y tenía miedo por las noches. Tras el incidente se activó un protocolo de seguridad y la docente fue trasladada a otro municipio.

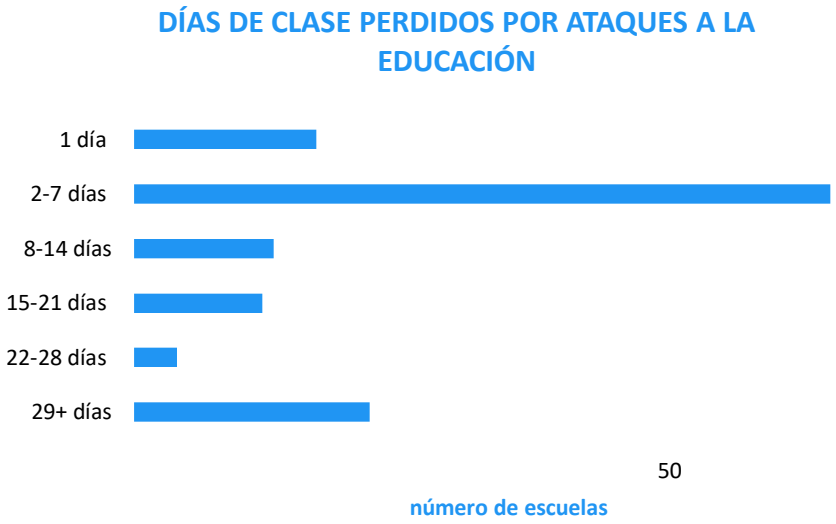
REPERCUSIONES DE LOS ATAQUES EN LA EDUCACIÓN

Los administradores escolares y los docentes informaron de los efectos de gran alcance de los ataques a la educación. Además de los asesinatos y las lesiones, los efectos incluyeron daños a la infraestructura escolar y cierres, interrupciones en la asistencia, angustia psicológica y una disminución de la calidad de la educación. Además, los ataques a la educación afectaron de manera diferente a determinados grupos e instituciones, como las niñas, los estudiantes con discapacidad y las escuelas a las que asisten estudiantes indígenas.

DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y CIERRES

Las personas participantes de más del 15 % de las escuelas atacadas informaron de daños limitados o moderados en la institución. Los daños incluyeron agujeros de bala en las paredes de las escuelas, ventanas y puertas rotas y techos derrumbados, así como daños en los depósitos de agua, las conexiones eléctricas y los materiales educativos. A diferencia de otros contextos en los que son más comunes los ataques con misiles o los incendios provocados, las escuelas sufrieron relativamente menos daños en Colombia, ya que los ataques incluyeron extorsiones, amenazas y tiroteos en las inmediaciones, que pueden no haber causado daños.

En el caso de las ocupaciones de escuelas, participantes de alrededor del 10 % de las escuelas ocupadas informaron que el edificio sufrió daños limitados o moderados que requirieron reparaciones, especialmente en ventanas, puertas y electrodomésticos de cocina.[lxviii] Hablando acerca que su escuela se utilizó como campamento, un director en Nariño informó: *«Entraron por la ventana, sacaron los suministros del restaurante de la escuela, panela, arroz, todo lo que había. Usaron los baños como si fueran los suyos para ducharse y asearse. Lo dejaron muy sucio, desordenado, con todo tipo de paquetes de cigarrillos, latas de atún y condones. Es decir, fue horrible. Y hay que ir allí al día siguiente, antes de que lleguen los niños, para limpiarlo y comprobar si hay algún riesgo [para los niños]».*[lxix]



A su vez, se informó de más de 2.800 días de cierre de escuelas debido a ataques contra la educación, entre las escuelas incluidas en la encuesta. En promedio, las escuelas permanecieron cerradas alrededor de una semana cada vez, con cierres más prolongados debido a los daños causados por un ataque a la escuela o si esta se utilizaba con fines militares, y cierres más breves en caso de violencia e o en las rutas escolares o ataques a los docentes. Tras un ataque, las escuelas primarias, las escuelas rurales y las escuelas a las que asisten estudiantes indígenas fueron las que tardaron más en reabrir.

Cuando las escuelas cerraban tras un ataque o por su uso militar, solo algo más de la mitad de los estudiantes continuaban con su aprendizaje, por ejemplo, a través de clases virtuales o guías de estudio.

INTERRUPCIONES EN LA ASISTENCIA Y DIMISIONES DE DOCENTES

Alrededor del 10 % de los estudiantes de las escuelas afectadas comenzaron a asistir con menos frecuencia o abandonaron los estudios después de un ataque, siendo las niñas ligeramente más propensas a abandonar los estudios que sus compañeros hombres. Después de un ataque, los cuidadores mantenían con mayor frecuencia a las niñas en casa como medida de protección, ya que se percibía que la violencia era más peligrosa para ellas, según las personas participantes. Varios encuestados señalaron que las niñas mostraban un importante malestar psicológico y emocional después de los ataques, sobre todo porque se las consideraba más propensas a mostrar vulnerabilidad que sus compañeros hombres.

Los estudiantes con discapacidad también parecían más propensos a abandonar los estudios después de los ataques. Los directores de varias escuelas informaron que los cuidadores solían mantener a los estudiantes con discapacidad en casa después de los ataques, o los retiraban por completo, por su seguridad. Se consideraba que los estudiantes corrían un mayor riesgo debido a sus vulnerabilidades percibidas, como las dificultades para comprender la situación, las limitaciones de movilidad o las barreras de comunicación, dependiendo de su discapacidad. Hablando de un estudiante con discapacidad en comparación con sus compañeros, un docente de Nariño dijo: *«Él se vio más afectado, tenía más miedo, y entonces sus padres lo sacaron de la escuela por temor».*[lxx]

Algunos docentes también faltaron al trabajo después de los ataques o renunciaron por miedo. Los participantes informaron que, después de alrededor del 15 % de los ataques a la educación, al menos un docente dejó de trabajar en la escuela o solicitó un traslado. Por ejemplo, una docente de Antioquia dijo: *«Solicité el traslado debido al estrés emocional que... me causó el acoso sexual del jefe paramilitar, y lo obtuve [el traslado] solo tres meses después».*[lxxi]

En el caso de las amenazas o agresiones dirigidas a los docentes (en lugar de a la escuela), estos parecían aún más propensos a dimitir, en particular los docentes hombres, entre los encuestados en la encuesta dirigida a los educadores. Aunque esta relación no se exploró directamente, puede deberse a que los docentes hombres eran más propensos a recibir amenazas directas y creíbles o a que los actores armados los percibían como un mayor desafío.

REPERCUSIÓN EN EL BIENESTAR PSICOLÓGICO

Alrededor del 25 % de los docentes que sufrieron un ataque informaron de signos significativos de trastorno de estrés postraumático, entre los encuestados en la encuesta dirigida a los docentes. Esto incluía recuerdos o sueños perturbadores o no deseados, pérdida de interés en actividades que antes disfrutaban, dificultad para concentrarse y estar más alerta, entre otros. Las docentes mujeres eran ligeramente más propensas a presentar estos síntomas que sus colegas hombres, entre los encuestados. Un coordinador institucional masculino afirmó: *«Muchos profesores vivían en un estado de miedo constante y tres profesoras fueron ingresadas en el hospital debido a una crisis nerviosa».*[lxxii]

Tras un ataque, aproximadamente el 10 % de los docentes recibieron o se les ofrecieron servicios de apoyo psicosocial, según los participantes en la encuesta dirigida a docentes. Los docentes

mencionaron que los servicios fueron prestados por el Ministerio de Educación, el plan de salud pública (*Entidades Promotoras de Salud*), *el Instituto Colombiano* de *Bienestar Familiar*, ONG y organizaciones religiosas. Aproximadamente la mitad de los docentes informaron que los servicios fueron eficaces o satisfactorios.

Los estudiantes también experimentaron angustia psicológica después de los ataques. Los participantes informaron que, en la medida de lo posible, se proporcionó apoyo en materia de salud mental a los estudiantes, y que, entre las escuelas incluidas en el estudio, los estudiantes hombres recibieron más apoyo que sus compañeras mujeres.

REPERCUSIÓN EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN Y EL APRENDIZAJE

Los ataques contra la educación afectaron a la calidad educativa y al aprendizaje, según la muestra del estudio. Casi dos tercios de los directores de escuela informaron de un descenso en la calidad de la enseñanza después de que su escuela o su personal fueran atacados. Los docentes se distraían y no podían concentrarse en sus clases, sufrían pérdidas de memoria o estaban constantemente en estado de alerta. Un director de escuela de Norte de Santander compartió que la calidad de la educación disminuyó porque algunos de sus colegas *«…tenían ataques de pánico. Uno no prepara bien la clase ni enseña con normalidad cuando está en estado de alerta máxima».*[lxxiii]

Además, casi el 20 % de los estudiantes de las escuelas afectadas tuvieron dificultades para aprender después de un ataque, según los directores encuestados.

En el caso de los cierres de escuelas debido a un ataque, los estudiantes recibieron guías de aprendizaje u otro material para estudiar en casa en poco más de la mitad de los incidentes documentados en este estudio. Concretamente, un porcentaje menor de directores de escuela en Chocó (46 %) y Norte de Santander (43 %) informaron que los estudiantes fueron enviados a casa con materiales de aprendizaje o recibieron otro tipo de apoyo a distancia después de un ataque, en comparación con Antioquia y Nariño (más de la mitad). Sin embargo, muchos docentes consideraron que estas guías eran ineficaces para el aprendizaje de los estudiantes, especialmente para los más pequeños, que necesitaban más apoyo. Un docente de Nariño dijo: *«Enseñamos utilizando guías de estudio y eso no es lo mismo, el desarrollo de las actividades y el proceso de enseñanza-aprendizaje en general se ven muy afectados».*[lxxiv] Al sumarse a la pérdida de la estructura del aula, la socialización y el aprendizaje experiencial, los docentes estaban seguros de que algunos estudiantes se habían quedado atrás debido a los cierres.

NORMALIZACIÓN DEL CONFLICTO

A pesar de lo anterior, algunos directores también afirmaron que los educadores y los estudiantes de sus escuelas se habían acostumbrado al conflicto armado. Dado que la violencia a su alrededor se había normalizado, en algunos casos los estudiantes no parecían verse afectados y la enseñanza y el aprendizaje continuaban.

Por ejemplo, los directores de ciertas zonas mencionaron que ellos y el personal se habían acostumbrado a la presencia de actores armados en sus escuelas o cerca de ellas, ya que ocurría con tanta regularidad. Un docente de Chocó informó que los actores armados utilizaban repetidamente su escuela como base temporal. *«La verdad es que me cansé de esperar, y así fue como en más de una ocasión se quedaron cuatro, cinco, seis días y no se marchaban»,* contó. *«Así que tuve que llevarme a los* estudiantes *y marcharme, y darles clase en la comunidad [en su lugar]».*[lxxv]

PREVENCIÓN Y RESPUESTA

Las personas participantes relataron diversas experiencias en la respuesta a los ataques contra la educación y en la labor de prevención. También compartieron sus percepciones sobre la justicia y sus ideas para proteger mejor las escuelas, los estudiantes y el personal.

Cuando se producían ataques a las escuelas, los docentes informaron que seguían los protocolos o su mejor criterio para asegurar sus aulas cerrando puertas y ventanas, mientras instruían a los estudiantes para que mantuvieran la calma y evitaran correr. Algunos señalaron que su propio miedo se veía atenuado por sus experiencias o formación previas, y por una determinación centrada en tranquilizar y proteger a los niños.

En casos limitados, los docentes o las comunidades lograron evitar la violencia o pedir a los actores armados que desalojaran las escuelas. En alrededor del 40 % de las ocupaciones escolares incluidas en este estudio, un docente pidió al actor armado que abandonara la escuela, una petición que, cuando se formuló, tuvo más éxito que fracasos. Los educadores también pusieron en marcha medidas para denunciar la violencia en caso de que se produjera.

Entre las escuelas que *no* habían sufrido ataques contra la educación (pero que se encontraban en zonas afectadas por el conflicto o inseguras), alrededor del 30 % de las personas participantes informaron que no habían tomado medidas para aumentar la seguridad de las escuelas, los estudiantes o los docentes. Entre el 70 % aproximadamente de las escuelas que sí lo habían hecho, las medidas más comunes eran cerraduras en las puertas, portones, sistemas informales de alerta temprana y simulacros de evacuación.

RESPUESTAS POSTERIORES A LOS ATAQUES PARA MANTENER LA SEGURIDAD DE LAS ESCUELAS

Entre las escuelas que informaron de ataques contra las instalaciones, los estudiantes o los docentes, o de uso militar, solo algo más del 10 % recibió algún tipo de respuesta para mantener la escuela más segura frente a futuros ataques o situaciones de inseguridad. Los directores informaron que, cuando se produjeron respuestas, los actores que participaron con mayor frecuencia fueron las comunidades, incluidas las *Juntas de Acción Comunal*, los administradores educativos, los ministerios de educación a nivel departamental, los grupos de defensa indígenas, las ONG y el ejército.

Las respuestas más comunes para mantener la seguridad en las escuelas fueron instalar puertas o cerraduras en las entradas, establecer simulacros de evacuación, crear sistemas formales o informales de notificación temprana y contar con la presencia de guardias indígenas o militares. Otras respuestas incluyeron diálogos comunitarios sobre el derecho a la educación, campañas públicas para crear conciencia sobre el reclutamiento en las rutas escolares, llevar tarjetas de identificación y actualizar los planes de mitigación de riesgos de las escuelas. Más de la mitad de los directores de escuela consideraron que la respuesta era suficiente, entre aquellos cuyas escuelas recibieron una respuesta para aumentar la seguridad.

Como se ha mencionado anteriormente, otras respuestas a los ataques incluyeron, en algunos casos, reparaciones en las escuelas, así como apoyo psicosocial u otro tipo de apoyo a algunos estudiantes y docentes.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA PREVENIR LOS ATAQUES A LA EDUCACIÓN O EXPULSAR A LOS ACTORES ARMADOS DE LAS ESCUELAS

- Una maestra de una comunidad indígena de Nariño compartió el **enfoque conjunto** adoptado para limitar el reclutamiento relacionado con la escuela. Dijo: *«Unidos, todos los líderes indígenas del territorio van a hablar con los grupos armados para que no se lleven a los niños y niñas de las comunidades (resguardos)».*[lxxvi]

- Una maestra de Norte de Santander describió **un acuerdo entre la comunidad y los grupos armados para proteger las escuelas**. Dijo: *«Ahora hay un acuerdo entre los grupos [armados] y la comunidad para no atacar ni afectar a los estudiantes, los maestros y, especialmente, el edificio [de la escuela]. Este acuerdo se creó con el propósito de proteger a los niños que asisten a la escuela, es lo único que se ha logrado».*[lxxvii]

- Un docente de Norte de Santander contó cómo pidió a un **miembro de un grupo armado que desalojara** la escuela, a pesar de los importantes riesgos que ello conllevaba. Dijo: *«[El grupo armado] estaba distribuyendo material propagandístico. La escuela, como digo, no tiene valla. Yo... me dirigía a un aula cuando entró uno de sus miembros. Venía con un rifle en la mano y con propaganda, y le dije que no podía entrar en la escuela armado ni uniformado. Si quería entrar en la escuela, tenía que cambiarse de ropa y dejar las armas fuera. El hombre me miró y dijo: «Disculpe, señor profesor». Y se marchó».*[lxxviii]

- Para **trasladar un campamento del Ejército cercano**, una docente de Nariño lo denunció a sus superiores. Ella compartió: *«El año pasado... el Ejército... instaló sus campamentos muy cerca de la escuela. Y esto representaba un riesgo inminente, bueno, de que algo pudiera pasar. Durante esos días, los padres no enviaban a los niños a la escuela. Tuve que entregarles las guías de estudio para que pudieran aprender en casa. Al ver esta situación, se informó a la dirección para que se comunicaran con el alcalde y que él, a su vez, lo arreglara para que no instalaran estos campamentos cerca de la escuela».*[lxxix]

- Una docente de Norte de Santander explicó el **protocolo de seguridad** que pusieron en marcha para informar lo antes posible de un ataque en las rutas escolares, si fuera necesario. Dice: *«Nosotros [los* docentes*] estamos en contacto y nos mantenemos informados unos a otros en la carretera. Solo informamos al director o al coordinador si no vamos a llegar a tiempo... si no conseguimos llegar a la hora establecida, ellos llevan a cabo el proceso [de informar de un ataque] en caso de que sea necesario».*[lxxx]

DENUNCIA DE LOS ATAQUES A LA EDUCACIÓN

Alrededor del 30 % de los ataques fueron denunciados en un esfuerzo por buscar justicia, entre los documentados en este estudio. Aparte de denunciar el ataque al director de la institución educativa, las vías más comunes que eligieron los educadores para denunciarlo fueron el gobierno municipal, el gobierno departamental, la policía, la fiscalía, la *Defensoría del* Pueblo y los líderes comunitarios. Estos resultados parecen reflejar la estructura administrativa de Colombia, en la que los departamentos son responsables del funcionamiento del sector educativo; dado que el punto de contacto habitual de los directores y directores de escuela es el gobierno departamental y municipal, recurrir a ellos sería algo habitual a la hora de denunciar un ataque a la educación.

Entre los directores que dijeron haber denunciado el ataque, las razones más comunes para hacerlo fueron prevenir futuros ataques, solicitar protección a las autoridades y pedir orientación. En el caso de la encuesta dirigida a los docentes, los educadores también denunciaron la violencia para solicitar un traslado seguro a otro municipio.

Entre los directores que afirmaron *no* haber denunciado el ataque, las razones más comunes fueron el miedo general, el temor a represalias contra ellos mismos, sus familias o sus comunidades, así como la desconfianza en el gobierno. Algunos señalaron que otros docentes que habían denunciado incidentes habían sido amenazados o asesinados. Otra razón común fue la normalización del conflicto armado. Un profesor de Norte de Santander afirmó: *«Es algo habitual en la región»,* en referencia a los ataques contra la educación.[lxxxi] Por su parte, en las comunidades indígenas, los docentes compartieron que los líderes comunitarios pueden ser informados de los ataques, pero no los denuncian, ya que hacerlo puede dar lugar a represalias por parte del autor o generar otros riesgos.

Más del 90 % de los directores de escuela que denunciaron el ataque dijeron que el autor no había sido responsabilizado o que no sabían qué había ocurrido en el caso. Hablando de la extorsión, una maestra de Chocó compartió: *«Fui a la Fiscalía y presenté la denuncia. Después de mucho tiempo, me respondieron que no habían capturado a nadie».*[lxxxii]

En un número limitado de casos, en respuesta a una denuncia, los directores dijeron que las autoridades educativas o municipales realizaron una visita, se desplegó a la policía o al ejército en la zona o se convocaron reuniones con instrucciones para impartir educación en situaciones de emergencia.

PERCEPCIONES DE LOS MAESTROS SOBRE LA JUSTICIA

En los municipios rurales donde se llevó a cabo este estudio, los directores de escuela informaron que los principales actores que impartían justicia en sus comunidades eran las juntas de acción comunitaria y los líderes de las comunidades indígenas, seguidos de los grupos armados, la policía y los grupos de defensa indígenas.[lxxxiii] Algunos encuestados también informaron que ningún actor impartía justicia en la zona.

Los actores en los que los directores de escuela informaron tener más confianza para investigar eficazmente los ataques a la educación eran los Ministerios de Educación a nivel departamental y las Juntas de Acción Comunitaria o los líderes indígenas, seguidos por el ejército, la policía y la fiscalía.

La mayoría de los directores de escuela dijeron que tenían «poca» o «algo» de confianza en que el sistema judicial dictara veredictos justos e imparciales en los casos relacionados con ataques a la educación.

LLAMAMIENTOS A LA ACCIÓN DE LOS DOCENTES

Los docentes compartieron diversas actividades, políticas y programas que, en su opinión, podrían utilizarse para prevenir los ataques contra las

escuelas, los estudiantes y el personal, y para evitar el uso militar de las instituciones educativas.[lxxxiv] Sin embargo, también destacaron la dificultad de hacer frente a los ataques contra la educación, dada la presencia desigual del Estado, las restricciones presupuestarias y la coordinación necesaria entre los distintos niveles de gobierno y entre los organismos gubernamentales.

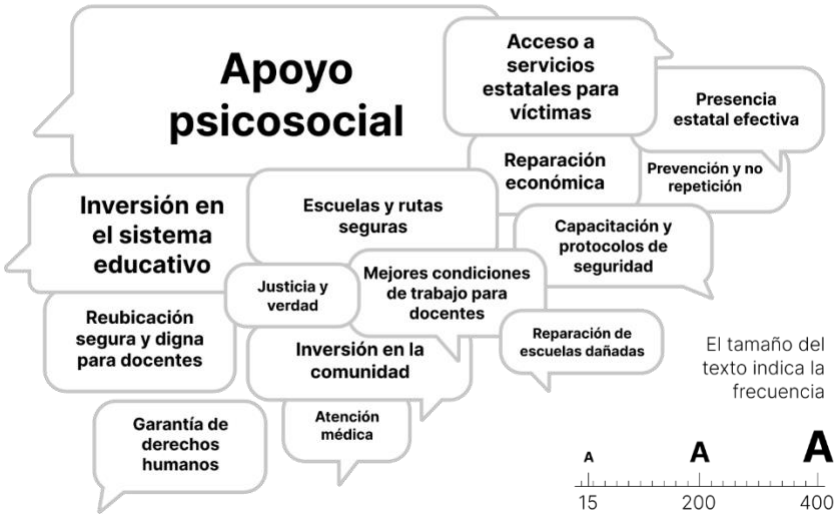
Algunas de estas estrategias se han organizado en la tabla que figura a continuación. Se han combinado, pero ciertas estrategias son más pertinentes para prevenir determinados tipos de ataques; por ejemplo, los ataques contra las escuelas podrían prevenirse mejor construyendo muros, mientras que los docentes podrían protegerse mejor mediante una reubicación segura en otro municipio.

Los directores de escuela también compartieron qué tipo de restitución creían que debían recibir las escuelas, los estudiantes y los docentes que fueron atacados o sufrieron violencia directa como parte del proceso de paz de Colombia. Los docentes mencionaron con mayor frecuencia el apoyo psicosocial y de salud mental, la inversión en educación, edificios escolares y rutas más seguras, el acceso a los servicios gubernamentales, la restitución financiera y la protección de los derechos humanos, entre otras formas de restitución.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA	
Nacional	• Inversión en educación, servicios sociales y desarrollo comunitario • Diálogo interinstitucional y grupos de trabajo para apoyar el seguimiento y la denuncia de los ataques contra la educación y las iniciativas de prevención y respuesta • Difusión continua de la Política Integral de Gestión de Riesgos Escolares y Educación en Situaciones de Emergencia • Campañas para promover las escuelas como espacios seguros y libres de conflictos
Comunidad	• Promover la imparcialidad de la educación y el derecho a la educación dentro de las comunidades (y, por extensión, con los grupos armados, en algunos casos) para que las escuelas y los docentes no sean considerados parte del conflicto (por ejemplo, mediante debates comunitarios) • Diálogo y sensibilización con los grupos armados para que reconozcan que la educación no forma parte del conflicto, de conformidad con el derecho internacional humanitario • Establecer sistemas de alerta temprana informales o formales para notificar a las escuelas, los docentes y las autoridades en caso de estallido de violencia, incluso a lo largo de las rutas escolares, a fin de proteger a los estudiantes. • Establecer sistemas formales de alerta temprana para notificar a los cuidadores que mantengan a los estudiantes en casa en caso de que se produzca un brote de violencia. • Comunicación regular con los líderes de las comunidades indígenas.
Escuela	• Reubicar las comisarías y bases militares lejos de las escuelas. • Aumentar la presencia policial y militar en la zona (pero *no* en las inmediaciones de la

	escuela). • Contratar guardias de seguridad privados. • Construir infraestructuras más seguras (por ejemplo, vallas, muros, cámaras de seguridad, rejas en las ventanas, cerraduras en las puertas) • Proporcionar material de seguridad (por ejemplo, botiquines de primeros auxilios). • Proporcionar apoyo técnico en materia de reducción de riesgos y prevención de la violencia a las escuelas rurales y afectadas por conflictos, prestando especial atención al género y a las comunidades en situación de riesgo • Establecer protocolos de seguridad que la escuela debe seguir en caso de ataque. • Realizar simulacros de evacuación y simulacros para refugiarse • Desarrollar e implementar un apoyo flexible al aprendizaje en casa para utilizar después de un ataque, incluyendo herramientas y guías que no requieran conexión a Internet ni servicio telefónico, con el fin de garantizar la continuidad del aprendizaje y minimizar el abandono escolar.
Rutas escolares	• Remoción de minas y seguridad (por ejemplo, señales de advertencia, campañas de sensibilización sobre las minas, educación sobre los riesgos). • Transporte seguro para docentes y estudiantes hacia y desde la escuela (por ejemplo, desplazamientos en grupo, transporte seguro en autobús o barco).
Docentes y estudiantes	• Formación para docentes sobre las medidas que deben tomarse en caso de ataque (por ejemplo, cómo comunicarse con el agresor, cómo mantener la seguridad y la calma tanto propia como de los estudiantes, cómo ponerse en contacto con las autoridades). • Establecer protocolos de seguridad para que los docentes, los estudiantes y las familias sigan en caso de ataque, incluso en casa (por ejemplo, mantener a los estudiantes en casa si se produce un ataque en la escuela o en el trayecto hacia ella). • Reubicación segura y rápida de los docentes cuando se vean amenazados o después de un ataque. • Grupos de apoyo para docentes que viven en contextos de violencia, incluyendo reuniones virtuales o apoyo mutuo a través de aplicaciones de mensajería. • Prestación de servicios de apoyo psicosocial y de otro tipo a los estudiantes y docentes que hayan sobrevivido a un ataque o que vivan en contextos de violencia; el apoyo debe ser multisesión y a largo plazo, según sea necesario. • Promoción de sesiones de autocuidado y bienestar psicológico para los docentes (por ejemplo, pausas activas, espacios de relajación y redacción de diarios). • Tarjetas de identificación para los docentes • Campañas de sensibilización para los estudiantes sobre la posible violencia y los peligros en la zona, incluido el reclutamiento en las rutas escolares. • Pedagogía sensible al conflicto para los estudiantes.

VOCES DE LAS Y LOS DOCENTES



CONCLUSIÓN

Este estudio documentó más de 600 ataques contra la educación en cuatro departamentos colombianos, ocurridos entre 2020 y la primera mitad de 2025, junto con medidas innovadoras de prevención y respuesta para salvaguardar el aprendizaje, como infraestructuras escolares más seguras y sistemas de alerta temprana. Las repercusiones de los ataques contra la educación incluyeron daños a las escuelas, el abandono escolar y la disminución de la calidad de la educación, con un impacto diferencial en las niñas, los estudiantes con discapacidad y las escuelas a las que asisten estudiantes indígenas. Los educadores expresaron su mayor confianza en los ministerios de educación a nivel departamental y en las juntas de acción comunitaria o los líderes indígenas a la hora de denunciar los ataques contra la educación con fines de justicia. Por último, los docentes hicieron un llamamiento a la acción para proteger mejor a las escuelas, los estudiantes y los educadores, por ejemplo, proporcionando apoyo en materia de salud mental, protocolos y formación en materia de seguridad, y reubicando de forma segura y rápida a los docentes tras las amenazas.

Este estudio abordó varios temas que merecen una investigación más profunda en Colombia. Entre ellos se encuentran el uso de drones en los ataques a escuelas, el uso de las redes sociales para reclutar estudiantes en grupos armados y si las escuelas sin título legal sobre la tierra (el 20 % de la muestra) tienen menos probabilidades de recibir reparaciones u otro tipo de apoyo después de un ataque.

Las recomendaciones basadas en los datos de este estudio se presentaron al principio del informe. Las opiniones de los docentes deben ocupar un lugar central en la elaboración de planes para el sector educativo destinados a prevenir y responder a los ataques contra la educación.

NOTAS

[i] Encuestado n.º 70
[ii] Coalición Global para Proteger la Educación de los Ataques (GCPEA), *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, p. 13.
[iii] GCPEA, *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, p. 11.
[iv] GCPEA, *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, p. 79.
[v] GCPEA, «Grupos armados no estatales y ataques contra la educación: análisis de las tendencias y prácticas para frenar las violaciones», septiembre de 2023, p. 21; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), «Los niños de Ucrania encuentran fuerza y refugio en las escuelas del metro», 25 de mayo de 2022.
[vi] GCPEA, «Mejorar la rendición de cuentas por los ataques contra la educación: orientación sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos relacionados con la educación», enero de 2025, pp. 17-18.
[vii] Más concretamente, la GCPEA define los ataques contra la educación como «cualquier uso real o amenaza de uso de la fuerza contra estudiantes, docentes, académicos, personal de apoyo educativo y de transporte (por ejemplo, conserjes, conductores de autobús), funcionarios de educación, edificios, recursos o instalaciones (incluidos los autobuses escolares)». Entre los autores de los ataques se incluyen: «las fuerzas armadas, las fuerzas del orden y otras entidades de seguridad del Estado, incluidos los servicios de inteligencia, así como entidades asociadas, como grupos paramilitares o policías paramilitares». GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 79.
[viii] GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 28.
[ix] Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), «Los niños y los conflictos armados y la violencia contra los niños», discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, marzo de 2012; GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 18.
[x] GCPEA, *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, pp. 80-83.
[xi] GCPEA, *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, p. 80.
[xii] GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 83.
[xiii] Human Rights Watch (HRW), «Escuelas de Sudán del Sur ocupadas por militares», 14 de diciembre de 2015; GCPEA, «Grupos armados no estatales y ataques contra la educación: análisis de tendencias y prácticas para frenar las violaciones», septiembre de 2023, p. 18.
[xiv] GCPEA, «The Impacts of Attacks on Education and Military Use in Myanmar» (El impacto de los ataques contra la educación y el uso militar en Myanmar), septiembre de 2022.
[xv] Bede Sheppard, «Mantener las escuelas a salvo del campo de batalla: por qué son importantes los esfuerzos jurídicos y políticos a nivel mundial para disuadir del uso militar de las escuelas», *Revista Internacional de la Cruz Roja*, vol. 101, n.º 911, 2019, p. 670.
[xvi] Moulid Hujale, «Las escuelas cierran en el noreste de Kenia después de que Al-Shabaab atacara a los profesores», *The Guardian,* 10 de marzo de 2020; CICR, «Los niños y los conflictos armados y la violencia contra los niños», discurso ante el Consejo de Derechos Humanos, marzo de 2012.
[xvii] GCPEA, *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024, p. 81.
[xviii] GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 81.
[xix] GCPEA, *Education under Attack 2024*, junio de 2024, p. 56.
[xx] CICR, «El costo humano de los conflictos armados en Colombia», 3 de abril de 2024; Rule of Law in Armed Conflicts, «Conflictos armados no internacionales en Colombia», consultado en octubre de 2025; International Crisis Group, «El crimen sin resolver en la «paz total»: cómo lidiar con los gaitanistas de Colombia», marzo de 2024; HRW, «Colombia: los grupos armados azotan la región fronteriza», marzo de 2025.
[xxi] Juliana Gil, «El aumento de la violencia armada en Colombia: ¿cómo hemos llegado a esta situación?», *The New Humanitarian*, 31 de julio de 2025; CICR, «Retos humanitarios 2025, Colombia», abril de 2025, p. 3.
[xxii] Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), «Colombia: Millones de personas viven ahora en zonas de conflicto», 15 de agosto de 2025.
[xxiii] Centro de Seguimiento de Desplazados Internos, «Colombia», última actualización el 14 de mayo de 2025.
[xxiv] Naciones Unidas, «A pesar de los avances de Colombia en la consolidación de la paz, las comunidades, los excombatientes y los líderes políticos y sociales siguen amenazados, según informa el Representante Especial al Consejo de Seguridad», SC/16123, 18 de julio de 2025. HRW, «Colombia», *Informe Mundial 2025*, 2025; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, «Colombia: Actualizaciones urgentes», septiembre de 2025.
[xxv] NRC, « ». Informe semestral de escuelas seguras, , de 2025 », julio de 2025.
[xxvi] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024; Track Attacks on Education (TRACE) Data Portal, página «Colombia», consultada en octubre de 2025.
[xxvii] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024; portal de datos TRACE, página «Colombia», consultada en octubre de 2025; Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO), « Boletín de monitoreo n.º 33 », 26 de septiembre de 2025.
[xxviii] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024; COALICO, «de monitoreo n.º 33 » , 26 de septiembre de 2025.
[xxix] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024.
[xxx] Novelli, Mario, «Education, conflict and social (in)justice: Insights from Colombia», *Educational Review,* agosto de 20106, 2(3):271-285; GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024.
[xxxi] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024; NRC, «»semestral de escuelas seguras, ,de 2025, , julio de 2025.
[xxxii] GCPEA, capítulo «Colombia», *Education under Attack 2024*, junio de 2024.
[xxxiii] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, «Los niños y los conflictos armados», A/77/895-S/2023/363, 5 de junio de 2023, p. 48; Stefano Pozzebon y Tatiana Arias, «Soldados colombianos confiesan haber abusado sexualmente de una niña indígena, según el fiscal general», *CNN*, 27 de junio de 2020; GCPEA, capítulo «Colombia», *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024.

[xxxiv] GCPEA, *Kit de herramientas para recopilar y analizar datos sobre ataques a la educación*, enero de 2023, p. 2.
[xxxv] GCPEA, «Safe Schools Declaration Endorsements» (Respaldo a la Declaración sobre Escuelas Seguras), página de la Declaración sobre Escuelas Seguras, consultada en noviembre de 2025.
[xxxvi] Ministerio de Educación Nacional, «Plan de Acción sobre Escuelas Seguras», 2023.
[xxxvii] Ministerio de Educación Nacional, «Política de Gestión Integral del Riesgo Escolar y Educación en Emergencias», 1 de abril de 2025.
[xxxviii] GCPEA, «Proteger las escuelas del uso militar: 2021», octubre de 2021, p. 51.
[xxxix] GCPEA, «Impacto práctico de la Declaración sobre Escuelas Seguras», mayo de 2025, p. 2.
[xl] Para más información, véase: «a los siete soldados acusados de violar a una niña embera en Risaralda », *Infobae*, 1 de agosto de 2021; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, «La CIDH condena el secuestro y la violación colectiva de una niña indígena de 12 años en Colombia y la falta de una investigación adecuada de este delito», 29 de junio de 2020.
[xli] Véase, por ejemplo, COALICO, «de monitoreo n.º 33 », 26 de septiembre de 2025; Save the Children, «Informe anual: 2024», agosto de 2025, p. 12; UNICEF, «: Todos los niños, y adolescentes tienen derecho a aprender y a desarrollarse integralmente », consultado en octubre de 2025; La Corporación Infancia y Desarrollo (LA CID), « Educación », consultado en octubre de 2025.
[xlii] CICR, «Humanitarian Challenges 2025, Colombia», abril de 2025, p. 15; Geneva Call, «Pathways to Hope, Annual Report 2024», junio de 2025, p. 21.
[xliii] GCPEA, capítulo «Colombia», *La educación bajo ataque 2024*, junio de 2024.
[xliv] Véase GCPEA, *Toolkit for Collecting and Analyzing Data on Attacks on Education*, enero de 2023; GCPEA, «Methodology», *Education under Attack 2024*, junio de 2024.
[xlv] Límites departamentales © Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
[xlvi] Los datos de la GCPEA no pudieron utilizarse como marco de muestreo porque los incidentes se compartieron a nivel municipal (en lugar de a nivel escolar) y porque la GCPEA había recopilado relativamente pocos incidentes de ataques a la educación a través de los medios de comunicación y otros informes (alrededor de 200 en dos años).
[xlvii] Se utilizaron escalas de gravedad para los municipios del Clúster de Educación (necesidades humanitarias de la población), respaldadas por escalas similares del Clúster de Protección, con especial atención a los niños.
[xlviii] Una característica única de la educación en Colombia es que, en general, una o más escuelas más pequeñas (*sedes*) suelen estar organizadas bajo una institución educativa más grande o principal (*principal*). Todas estas unidades fueron tratadas por igual en el muestreo.
[xlix] Por motivos de anonimato, los datos proporcionados por la GCPEA se desglosaron solo a nivel municipal (es decir, no se incluyeron los nombres ni las direcciones de las escuelas), por lo que no pudieron utilizarse como marco de muestreo. Además, la GCPEA había identificado relativamente pocos ataques contra la educación y uno de los objetivos del estudio era identificar otros.
[l] Número de protocolo del IRB de TIER: 52504081
[li] Encuestado n.º 466
[lii] Encuestado n.º 158
[liii] La naturaleza indiscriminada de algunos ataques contra escuelas se diferencia de otros ataques documentados en este estudio, como el uso militar, los ataques contra docentes y el reclutamiento de niños y la violencia sexual relacionados con la escuela, en los que la escuela o la persona eran generalmente el objetivo de la violencia o el daño.
[liv] Encuestado n.º 63
[lv] Encuestado n.º 147
[lvi] En este estudio, el uso militar incluye solo escuelas (en lugar de universidades, centros de formación profesional u otras instituciones), ya que esas fueron las únicas instituciones educativas incluidas en la muestra. Los resultados no deben interpretarse en el sentido de que no se producen ataques contra universidades en estos departamentos (de hecho, se han denunciado ataques de este tipo en la serie de informes *«La educación bajo ataque»* de la GCPEA).
[lvii] Encuestado n.º 417
[lviii] Como se menciona en la sección de metodología, las escuelas de la muestra se encuentran en municipios rurales. Alrededor del 36 % de las escuelas de la muestra se encontraban a uno o más kilómetros de la ciudad más cercana. Aunque los resultados deben interpretarse con cautela, es poco probable que el hallazgo de que un número significativo de escuelas de la ciudad se utilizaran con fines militares fuera el resultado del muestreo por sí solo.
[lix] Encuestado n.º 454
[lx] Encuestado n.º 147
[lxi] Encuestado n.º 274
[lxii] Encuestado n.º 7
[lxiii] Encuestado n.º 365
[lxiv] Encuestado n.º 380
[lxv] Los directores de los centros educativos informaron que ningún estudiantes se identificaba como LGBTQ+, y no se identificó ninguna relación entre los objetivos de reclutamiento y el hecho de que los estudiantes fueran LGBTQ+.
[lxvi] Encuestado n.º 445
[lxvii] Encuestado n.º 116
[lxviii] Aunque la encuesta incluye preguntas relevantes, no se identificó ninguna conexión directa entre el uso militar y el reclutamiento de niños. En particular, la mayoría de los reclutamientos de niños registrados en la encuesta tuvieron lugar de camino a la escuela. Sin embargo, hay un pequeño número de informes de reclutamiento de niños dentro o cerca de las escuelas, aunque el actor armado no parecía estar utilizando la escuela ni acampando cerca en ese momento.
[lxix] Encuestado n.º 432
[lxx] Encuestado n.º 54
[lxxi] Encuestado n.º 171
[lxxii] Encuestado n.º 64
[lxxiii] Encuestado n.º 75
[lxxiv] Encuestado n.º 459
[lxxv] Encuestado n.º 373
[lxxvi] Encuestado n.º 59
[lxxvii] Encuestado n.º 185

[lxxviii] Encuestado n.º 339
[lxxix] Encuestado n.º 489
[lxxx] Encuestado n.º 123
[lxxxi] Encuestado n.º 73
[lxxxii] Encuestado n.º 380
[lxxxiii] En esta sección se comparten los resultados de la encuesta de todos los directores de los centros educativos incluidos en la muestra, tanto los que informaron de un ataque a su centro, a sus estudiantes, a sus docentes o de uso militar, *como* los que no informaron de ningún ataque de este tipo.
[lxxxiv] En esta sección se comparten los resultados de la encuesta de todos los directores de escuela de la muestra, tanto los que informaron de un ataque a su escuela, estudiantes, docentes o uso militar, *como* los que no informaron de ningún ataque de este tipo.